



O P I N I Ó N

José María González Moya

Director General de APPA Renovables

Renovables en 2021: del rural a los mercados

El año que ahora despedimos ha sido un año típicamente atípico. En el sector renovable nos estamos acostumbrando a no acostumbrarnos y hacemos ya de la anomalía la normalidad. Tras un 2019 en el que tuvimos que acelerar para cumplir las metas de 2020 (por los objetivos marcados y por la fecha límite de las subastas), sufrimos un 2020 en el que la pandemia afectó a todos los sectores económicos, y, en 2021, hemos experimentado la volatilidad de los mercados internacionales. No es un sector para aburrirse, desde luego.

En cualquier otro ámbito, “del rural a los mercados” podría parecer una reivindicación del precio que nuestros ganaderos y agricultores ganan por sus productos en contraposición con el que, al otro extremo de la cadena de valor, pagan los consumidores finales. Sin embargo, en este caso pretende resumir dos de los grandes retos que han tenido que enfrentar los proyectos renovables durante este año.

Desde 1987, en APPA Renovables hemos estado luchando a favor de las energías renovables. Y uno de los principales argumentos que hemos utilizado a lo largo de estas más de tres décadas ha sido su capacidad para generar riqueza y empleo en las zonas rurales, su carácter distribuido y el potencial que tienen los pueblos para beneficiarse de estas energías. Por su propia naturaleza, las renovables son energías dispersas que requieren que los proyectos se desarrollen allí donde existe un mayor recurso energético disponible y, aunque la tecnología nos da cada vez mayores opciones, es un hecho que el potencial eólico, el solar o el biomásico están asociados a un lugar concreto.

El hecho de que debamos instalar los proyectos donde está el recurso no quiere decir, en modo alguno, que estos se instalen de forma indiscriminada. Antes de llevar a cabo un proyecto existen numerosos estudios y trámites, obligatorios unos y voluntarios otros, que se llevan a cabo: declaración de impacto ambiental, inventario de especies animales y protegidas, afectación o uso de montes públicos, vías pecuarias, bienes de interés cultural, integración paisajística, impacto acústico, estudios arqueológicos... Eso sin contar aquellas zonas donde la instalación de proyectos está limitada o directamente prohibida: distancias a núcleos urbanos, masas de agua y zonas inundables, zonas de protección de la avifauna, conectividad ecológica, zonas ZEPA, humedales RAMSAR... Por supuesto, será posible encontrar algún proyecto cuya ubicación podría mejorarse, pero la cantidad de estudios que se realizan y trámites que deben ser aprobados por los reguladores son extensísimos.

A pesar de ello, durante este 2021 que ahora cerramos hemos visto una contestación social cada vez mayor. Resumida en el eslogan “Renovables sí, pero no así”, hemos visto como se han ido organizando y acumulando esfuerzos en contra de la instalación de renovables. Estos esfuerzos, que cuentan con grupos de trabajo específicos, manuales de lucha y organizaciones ya estructuradas, usan el poder del

“no” y de la protesta para oponerse a proyectos que, en su opinión, son demasiado grandes o se sitúan en zonas equivocadas. Conceptos perfectamente respetables pero que, en vez de tratar de modificar la regulación, buscan el enfrentamiento. Uno de los textos reza directamente “el objetivo no debe perseguir la derrota de los eólicos (...) obliguemos a la empresa a buscar otro territorio menos conflictivo”. Lo que en cristiano significa: “si hacemos suficiente ruido, ya instalarán sus molinos o sus paneles en otro pueblo”.

Este fenómeno no es nuevo. Es el famoso NIMBY (no en mi patio trasero) aplicado al desarrollo renovable. Sin embargo, sí es nuevo que se realicen protestas organizadas, al menos con este nivel de organización y virulencia, contra un modelo energético que busca la sostenibilidad ecológica y que democratiza la energía como nunca se ha hecho. En el V Congreso Nacional de Energías Renovables, un profesional del sector nos mostraba un caso muy concreto: 100.000 alegaciones contra un parque eólico en Galicia. Esto no es grave únicamente porque la ciudadanía se movilice, algo respetable independientemente de su motivación, sino por el posicionamiento de algunos ayuntamientos y organismos públicos en contra de la Transición Energética, tomando partido en contra de empresas que cumplen las leyes, nacional, autonómica y local, y realizan inversiones positivas para sus economías.

En el caso de los mercados, la situación para las renovables ha sido compleja este año. La sensación de que las compañías eléctricas, de forma general, y las renovables, de forma particular, se benefician de los altos precios, tiene parte de razón... pero no toda. Al igual que un mercado eléctrico alto beneficia hoy a algunos proyectos renovables, 2020 fue un año nefasto para esos mismos proyectos. Sin embargo, cuando el año pasado los mercados cayeron y los precios marcaron récords negativos, esto no salió publicado. Y, no nos olvidemos, esos proyectos renovables verán ajustados sus ingresos, tanto al alza como a la baja, en su vida útil.

Tanto en el caso de la contestación social como en el caso de los altos precios de los mercados, el sector renovable debe realizar un esfuerzo de pedagogía. Explicar que, hoy por hoy, el modelo que perseguimos es el más sostenible, el más positivo para el mundo rural y el que más nos va a proteger de los precios altos de los carburantes. En 2022 tendremos que hacer un esfuerzo aún mayor para explicar las bondades de las renovables y aunar esfuerzos: el objetivo final lo merece. ■